

DIRECTOR-FUNDADOR: UILLO ACEVEDO SILVA GERENTE: JORGE CONTRERAS FEBLES
Fundado el 29 de Julio de 1993. Socio SIP - Andino - Actm. Una Publicación de Editora de Medios S.A.
Dirección: Carrera 4 No. 19-49 PBX 4214171 - Gerencia 4214085 Fax 4211376 Departamento de Publicidad 4213765
Departamento de Suscripciones y Servicio al Cliente 4214200 E-mail: hoydiario@hoydiariodelmagdalena.com.co
www.hoydiariodelmagdalena.com.co - Apartado. Aéreo No. 1770 Santa Marta - Colombia.

Frase del día

La vida no está hecha de deseos y
sí de los actos de cada uno.
PAULO COELHO

La infiltración en el paro estaba "cantada"

Son ya varios los muertos que deja el denominado paro agrario y camionero en el país. La violencia desenfrenada que se ha apoderado de la protesta no tiene límites. Y las imágenes de los noticieros de televisión son muy claras y contundentes: no se ven a simples campesinitos protestando. Son expertos terroristas los que se enfrentan a una maniataada fuerza pública que hace lo que puede por mantener el orden y la seguridad. Y para complemento el Gobierno menosprecia los alcances de esa violencia y de sus promotores que para nadie es un secreto, son los mismos con los cuales se sientan con mucha recurrencia en La Habana. Y a todo ello una sociedad los que observa como simple espectadora.

Los analistas del comportamiento colectivo sostienen que ese fenómeno de indiferencia, egoísmo y frialdad, se debe al pobre desarrollo de la conciencia nacional y la insolidaridad que nos caracteriza. Precisamente por la hipocresía que rodea a la sociedad colombiana.

Nadie discute que los males vienen de décadas atrás. Es inculcable las desigualdades sociales, las necesidades de los campesinos y de los agricultores en general. Y el más

craso de los errores cometidos por el Gobierno es haber dejado que esas insatisfacciones no fueran escuchadas en su momento y se les dedicara la inagotable chequera del Estado para complacer a ciertos sectores que a base del chantaje presionan para obtener los mejores dividendos.

Por lo tanto la preocupación es general. La ola de paros y protestas de este año de toda índole y en todas partes, no solo ha generado grandes traumatismos a la ciudadanía, sino también grandes costos al aparato productivo y comercial de amplias zonas del país.

Pero todavía más grave es lo que podría denominarse como la creación de la Cultura del Bloqueo, que se ha extendido a lo largo y ancho de la nación y que consiste en paralizar las actividades económicas, fomentar disrupciones laborales, bloquear carreteras, inmovilizar ciudades enteras y en no pocos casos, hasta promover la violencia. Lo anterior, para exigirle al gobierno ya sea nacional, departamental o municipal, que atienda promesas incumplidas pero también y lo que es más grave, para que ceda ante pretensiones puntuales de los manifestantes. De hecho, esa costumbre se ha vuelto tan común, que no solo sectores enteros la han convertido en su única iniciativa para tratar de resolver problemas, sino que se ha vuelto

también manera de hacer política.

El resultado de todo esto, es que esa Cultura del Bloqueo presenta ya un muy fuerte impacto para la economía nacional. Tanto, que desde la Asociación Nacional de Industriales, Anif, hasta el mismo Banco de la República, no solo se han mostrado muy preocupados por los efectos para la economía, sino que han llegado a afirmar que podría costar algunos puntos del Producto Interno Bruto, PIB, de este año, lo cual significa ya hablar de cifras descomunales.

Lamentablemente, el incumplimiento del Estado de sus obligaciones mínimas sobre todo en materia de infraestructura, no de ahora sino de siempre, sumado a la implementación de políticas erradas principalmente en lo que tiene que ver con el agro

Así las cosas, resulta urgente y necesario aplicar dos fórmulas distintas. La primera: Que el Estado cumpla con sus compromisos y atienda las necesidades de sectores que como el agropecuario, se encuentran en serios problemas. Y simultáneamente, debe aplicar la ley y ejercer la autoridad contra quienes se aprovechan de esa situación para impulsar sus propósitos oscuros y criminales.

En búsqueda de la calidad educativa

Esta es la aspiración que se han trazado las instituciones que tienen en sus manos el manejo de ese importante servicio de la educación, el cual constituye la columna granítica del desarrollo de los pueblos. Con mucho más dedicación en su búsqueda, aquellos entes territoriales como el Magdalena y su Distrito Capital que han sentido con rigor el peso del deterioro de la calidad educativa por culpa de innumerables factores político-económicos que los han empujado a estar en sitios incómodos en el escalafón de los más deficientes; asunto que golpea con fortaleza la credibilidad de lo que se enseña y pone en entredicho la responsabilidad, la eficiencia y el prestigio de los educadores.

La calidad en todo momento ha sido el objetivo central de los procesos educacionales, porque seguir su rastro significa transitar por caminos que conducen a la oxigenación del crecimiento de las comunidades en sus diferentes estructuras, lo cual alimenta, de la misma forma, el proceso civilizatorio. Por eso, se nos presenta como imprescindible para la educación el encontrar los medios eficaces y oportunos de cualificar a sus actores y de entregar hasta el último recurso a disposición, para obtener en el tiempo resultados favorables concretos que ayuden a la incentivación de la prosperidad y el aumento cultural de los ciudadanos.

Muy claras son las disposiciones nacionales que tratan sobre este bien educativo. Después de la consensuada Constitución de 1991 -instrumento jurídico que amplió el horizonte democrático-, con base en sus mandamientos, salieron a la luz pública la Ley General de la Educación, su Decreto Reglamentario y una serie de disposiciones legales en materia instructiva encaminadas a darle solidez a ese importante pilar del desenvolvimiento social.

En estos preceptos quedó meridianamente definida la calidad educativa como propósito prioritario de las instituciones encargadas de poner en marcha el nuevo sistema educativo tomado de los países más avanzados de accidente. Y a fe que su moderna estructura es prenda de garantía para la consecución de inmejorables resultados académicos. Cosa que

se hace evidente en algunos departamentos y ciudades del país.

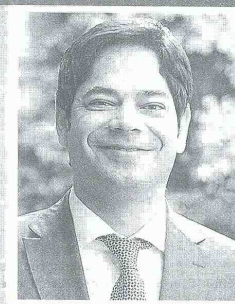
Otra es la cruda realidad que exhiben las comunidades del Magdalena y de Santa Marta, comarcas sometidas sin piedad a los vejámenes políticos y económicos por parte de sectores que en el gobierno no supieran, o no quisieron interpretar, en su exacta dimensión, la finalidad suprema de calidad en el servicio educativo consignada en la normatividad y exigida por la administración nacional. Creyeron ingenuamente quienes impulsaron desde el Gobierno la descentralización de la educación, que al fortalecer con recursos a los territorios certificados para manejar este servicio, se garantizaría la calidad puesto que quedaba en manos de funcionarios de la región. Crasa equivocación, porque la politización y el manejo no acertado de los recursos, fueron circunstancias que incidieron profundamente en la decadencia de la cualificación en estas zonas de la patria.

Pero, a pesar de estos infortunados sucesos por los cuales el Magdalena y Santa Marta se encuentran en los últimos lugares de los departamentos y ciudades en materia educativa, no podemos renunciar a la histórica misión de corregir los pasados errores. Mucho tiempo se ha perdido desde cuando se enarbóla la finalidad de alcanzar la excelencia educativa en nuestros territorios, pero no se ha perdido la esperanza de alcanzarla. Soplan vientos de renovación por la existencia de un profesorado dispuesto a enmendar la tarea y de una juventud interesada en la transformación educativa. Imprescindible, entonces, que los gobiernos dejen atrás las nefastas acciones pretéritas y se concentren con voluntad política a sacar adelante la tan anhelada Calidad Educativa que se reclama, en función de devolverle a nuestras provincias el prestigio perdido. Esta debe ser la inaplazable tarea también de todos, si queremos alcanzar aquellos fines. Proceder de forma contraria, y con la mirada puesta en el conformismo de la ocurrencia negativa de los procesos educacionales, es simplemente compartir las vicisitudes de una anómala situación que ha contribuido al atraso de nuestros pueblos y cerrar las compuertas del progreso que tanto necesitamos. La búsqueda de la excelencia educativa debe ser la consigna fundamental.



Por
JOSÉ
MANUEL
RODRÍGUEZ
PIMENTAL

PERSONAJE DE HOY



El presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró como nuevo Viceministro de Vivienda al administrador de empresas Guillermo Herrera Castaño, quien viene desempeñándose como Director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda. Herrera Castaño recibió su título profesional de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y tiene estudios de especialización en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia; en Administración Pública y Gobierno Urbano en el Institute for Housing and Urban Development Studies - IHS, Holanda, y en Reajuste de Terrenos como becario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA.

Minería y conflicto: responsabilidad empresarial

La minería debe contribuir a la solución del conflicto y no promover la violencia.

La estrategia del Presidente Juan Manuel Santos de impulsar la Locomotora Minero-Energética ha provocado un verdadero boom de esta actividad en el país, grandes multinacionales importan minerales o invierten en su extracción.

Sin embargo, estas pueden ser buenas noticias no solo para el Gobierno Nacional, sino también para muchos actores armados ilegales que han aumentado sus ingresos a través de las actividades mineras y petroleras criminales, como lo documentó el último informe del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITPA), sobre actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia.

Veamos un ejemplo: la compañía estadounidense Global Tungsten & Powders Corp.-GTP, es una de las empresas que ha importado minerales como el tungsteno de Colombia.

Sin embargo, recientemente GTP obtuvo información relacionada con que este mineral puede estar siendo extraído ilegalmente a través de grupos armados que ejercen influencia sobre



Por
JUAN
MANUEL
GALÁN

los sitios de extracción de tungsteno y sobre las rutas de transporte. Esta información impulsó a la empresa, a suspender todas las importaciones de tungsteno de Colombia, y adelantar una evaluación independiente sobre la extracción de ese mineral en el departamento de Guainía.

Desde hace varios años se ha analizado la relación entre la existencia y duración de conflictos armados con la presencia y explotación de recursos naturales, pero también, se escuchan corrientes alternativas que han descrito el potencial papel de la empresa privada en la construcción de la paz.

En línea con estas últimas, es fundamental contar con el compromiso del sector privado para que sus operaciones empresariales no solo se mantengan libres de cualquier forma de financiación del conflicto en Colombia, sino también para que asuman lo que se ha llamado una perspectiva de "sensibilidad al conflicto".

Hoy, mencionamos el caso de Global Tungsten & Powders que con firmeza decide tomar medidas para garantizar que sus actividades de aprovisionamiento no apoyen inconscientemente grupos armados; mañana, esperamos el mismo código de conducta en las demás empresas del país.

Responsabilidad social

La responsabilidad social de los medios de comunicación está prevista en el artículo 20 de la Constitución Política, pero es un concepto que, en términos generales, no se encuentra desarrollado en la legislación. Por otra parte, es un componente de la norma sobre la libertad de expresión y derecho a la información, cuya esencia no se plasma en el precepto y que ha estado sujeto a interpretación desde su entrada en vigencia en 1991. En consecuencia, no existe acuerdo acerca de lo que significa, y menos sobre las implicaciones prácticas que tendría su inobservancia.

Tampoco los jueces han adoptado decisiones concretas en cuya virtud un medio haya sido declarado socialmente responsable, y ello ocurre porque, si bien estamos ante una norma constitucional de aplicación inmediata -es decir, que puede operar directamente, sin necesidad de disposición legal que la reglamente o desarrolle-, lo cierto es que, como sus alcances no están definidos, mal puede deducirse una sanción para

alguien sin vulnerar el principio de legalidad garantizado en la Carta Política. Más aún: nadie puede afirmar que la responsabilidad social de los medios de comunicación deba cristalizarse en la imposición de sanciones por parte del Estado.

Es comprensible que el Congreso no haya emprendido la tarea de estudiar proyectos de ley referentes al tema, salvo la esporádica mención de la responsabilidad social en la Ley Estatutaria sobre estados de excepción (Ley 137 de 1994). La razón es sencilla: la misma norma constitucional que contempla la responsabilidad social prohíbe de manera expresa la censura, y por tanto los congresistas no se atreven a proponer o aprobar reglas sancionatorias que pudieran tomarse como modalidades de aquélla. Por ejemplo, sometiendo a juicio a un medio de comunicación por haber quebrantado el aludido principio.



Por
JOSÉ
GREGORIO
HERNÁNDEZ

OPINIÓN GRÁFICA



UN GESTO DE PAZ

UNO DE LOS REPRESENTANTES de los manifestantes en Boyacá se acerca y saluda al uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía, grupo encargado de garantizar que no se registren disturbios en el paro agrario.